

demora en el despacho de este asunto, de carácter urgente.

Sobre raspado a fs 85 renglon 7
fs 110 renglon 6, fs 113 renglon 13
sesenta, y concept. muy. - Dale. -

No habiendo más asuntos que
tratar se levanta la sesión, sien-
do las diez y nueve horas.

~~Wm. H. H. H.~~
J. J. W. H.

Sesión 17a.

Día 21 de marzo de 1924.

En Buenos Aires a las diez y
seis horas y treinta y cinco minu-
tos del día veintuno del mes de
marzo del año mil novecientos
veinticuatro, reunidos en la
sala de sesiones del Consejo
Nacional de Educación, el se-
ñor Vice-presidente doctor don
Francisco M. Alvarez, y señores
vocales profesor don Jorge
B. Boero y doctores don Fermín

Ensea y don Juan F. Pasqualetti, bajo la presidencia del doctor don Ernesto H. Ceballos, el señor presidente declaró abierta la sesión.

Acto continuo se leyó, aprobó y firmó el acta de la anterior.

En seguida el H. Consejo tomó en consideración los diversos asuntos que tenía para su resolución, disponiendo:

Sección Capital.

Considerando:

Que el H. Consejo al efectuar designaciones de Comisiones ad hoc integradas por funcionarios dependientes de la Repartición, no lo hace a favor de la persona que en el momento de ser nombrada desempeña el cargo, sino que lo hace a la Entidad respectiva, Director, Jefe, etc.

Que por consiguiente es innecesario hacer nueva designación para integrar las expresadas Comisiones, cada vez que por renuncia, jubilación, etc, deja de pertenecer a la misma alguno de ellos.

Que los pedidos de nuevas designaciones ocasionan tráctomos y demoras que es necesario evitar, se resuelve:

11.7/3 D/121

Establecer que la Comisión designada en el artículo 2.º de la resolución de 18 de mayo de 1923, corriente a fs 46 del expte es a favor de la entidad Inspectores Generales de la Capital, Provincias, Territorios, Director Administrativo, Director del Cuerpo Médico Escolar y Abogado Asesor del Consejo, y no a favor de las personas que desempeñaban el cargo en el tiempo de la designación, o que lo desempeñen en lo sucesivo. A continuación se dio lectura de las siguientes notas presentadas por el Sr. Secretario General del H. Consejo, don Víctor Juan Guillot y el Señor Abogado Jefe de la Oficina Judicial, Sr. Guillermo R. Fournage:

"Buenos Aires, marzo 17 de 1924.

Señor Presidente del Consejo Nacional de Educación.

Doctor Ernesto R. Celisio.

S/D.

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente y por su intermedio al H. Cuerpo que preside, comunicándole que la Convención de la Unión Cívica Radical reunida el 11 del mes corriente me ha proclamado candidato a diputado por el Distrito Electoral de la Capital.

El decreto reglamentario de la

Ley 8871, de fecha 21 de marzo de 1912, en el inciso final de su artículo 18, establecía para situaciones análogas la siguiente norma: "Cada funcionario nacional proclamado candidato a posiciones electivas hará renuncia de su empleo inmediatamente de haberse hecho la proclamación". - El D. E. actual, en cambio, ha contemplado con criterio distinto la situación de los funcionarios administrativos que en cumplimiento de deberes cívicos aceptan candidaturas a representaciones electivas del pueblo. En consecuencia y concordante con manifestaciones hechas en la H. Cámara de la Nación por el entonces Ministro del Interior, Dr. Nicolás Matienzo, el Excmo. Sr. Presidente de la Nación, en acuerdo de Ministros celebrado con fecha 2 de enero de 1923, dictó un nuevo decreto reglamentario cuyo artículo 5º deroga los que llevaban n.º 177 y 18 en el decreto de 21 de marzo.

Es evidente, entonces, que un funcionario público que haya sido proclamado candidato a una representación electiva queda en libertad de continuar desempeñando sus funciones. - Considero, sin embargo, y por razones obvias, que conviene un alegamiento temporario, que se conver-

✓
 "tería en definitivo en caso de que los resultados del escrutinio produjeran la incompatibilidad comprendida en el artículo 64 de la Constitución Nacional. —

Por lo tanto, y a mérito de lo expuesto, solicito del Consejo se me conceda licencia por el tiempo que media hasta la proclamación de los resultados del escrutinio de la operación electoral que se llevará a cabo el 23 del mes corriente. —

Saluda al Sr. Presidente con su más distinguida consideración
 Jdo. Víctor Juan Guillot. —

"Buenos Aires, marzo 15 de 1924. —
 Señor Presidente del H. Consejo Nacional de Educación. —

Dñ Ernesto H. Celleria. —
 Tengo el agrado de dirigirme a S. H. comunicándole que la H. Convención de la Unión Cívica Radical me ha proclamado candidato a Diputado Nacional para las elecciones del 23 del corriente. —

En consecuencia me dirijo al H. Consejo, me conceda la correspondiente licencia. —
 He proveído la oportunidad para agradecer las atenciones que los señores miembros del H. Consejo me han dispensado, saludando a S. H. con mi consideración más distinguida. —

Fd. Guillermo R. Fournouge".

El señor Presidente manifestó que, como ya lo había expresado a los señores Vocales, al estarlos para la reunión de hoy, el caso que se presentaba a consideración del H. Consejo, por los peticionantes, tenía suma importancia porque afectaba a principios de moral política y administrativa, lo que le obligaba a que, variando las normas usuales de tratar los asuntos corrientes, dadas las funciones de Presidente que desempeñaba, fundara su opinión al respecto, ya que no su voto, lo que solo, correspondería en caso de empate.

La cuestión planteada bajo la faz de un pedido de licencia continúo el señor Presidente, es en el fondo la siguiente: - El empleado público ¿puede ser candidato a Diputados Nacional conservando la función que desempeña?

Indiscutiblemente, la ley Electoral de 1912 no ha prohibido al empleado público, sino por excepción, que participe de la vida activa política; pero el decreto de marzo de 1912, reglamentario de esa ley, lo determinaba, y si es cierto que puede ser considerado ilegal, desde que iba más lejos que la ley misma.

«ma, no lo es menos que estaba ple-
 namente justificado por nuestros
 antecedentes políticos, los que de-
 mostraban que el peor vicio, el gra-
 ve mal de nuestra democracia, ra-
 dió, fundamentalmente en la
 ingerencia decidida de los go-
 biernos en la gestión de los par-
 tidos, y por ende en la dirección
 de la política en los comités. -
 Esa decidida ingerencia sig-
 nificó que la opinión del jefe
 del Gobierno debía interpretar-
 se y seguirse, e igualmente, como
 una consigna, hasta por los
 empleados más inferiores de la
 administración, lo que hubo
 de implicar el grave mal de que
 no podía haber empleados públi-
 cos que profesare opinión adver-
 sa a la del superior; esto fue
 la regla impuesta, como tal con
 excepciones, pero nada más que
 excepciones. - De ahí el vicio
 que corrompió nuestra vida políti-
 ca y la necesidad de que la reac-
 ción contra ese vicio fuese enér-
 gica, puesto que se trataba de
 extirpar un mal orgánico, tan
 arraigado que tenía su origen en
 el convenio mismo de nuestros
 apasionamientos políticos,
 y tan grave que nos había da-
 do frutos como aquellos de las
 clasificaciones esbozadas
 por los unitarios en 1828, y lle-

"vada después a los más graves ex-
tremos por los federales."

Hoy, antes bien el Poder Ejecutivo
en 1912 en establecer esa prohibi-
ción, que sí se pudo ser atacada
de inconstitucional como de-
creto reglamentario de la ley elec-
toral, era perfectamente consti-
tucional como reglamento dic-
tado en virtud de las facultades
que el artículo 86 (inciso 1º y 10º) de
la Constitución conferían al Po-
der Ejecutivo de la Nación, como Je-
fe Supremo, para nombrar y re-
mover el personal, pues venía
a demostrar que, con la misma
autoridad que aquellas le co-
tingían y como derivados de
las mismas, podía determinar
los casos en que considerase ne-
cesario, por razones especia-
les, declarar cesantías den-
tro de dicho personal.

Ahora bien, el artículo 18 del De-
creto de marzo 21 de 1912 estable-
cía lo siguiente; "Cada fun-
cionario nacional procla-
mado candidato a posicio-
nes electivas, hará renuncia
de su empleo inmediatamente
de haberse hecho la procla-
mación".

Por el artículo 5º del Decreto del
de enero de 1923, el Poder Ejecuti-
vo Nacional ha derogado
expresamente ese artículo

18, y si bien de ello pudiera deducirse que al funcionario o empleado público no le está vedado ser candidato a diputados y continuar en su función o empleo, que es como lo entienden los peticionantes, - sin entrar a la discusión de si esto es o no así, no es posible negar que el Consejo Nacional de Educación tiene por la ley 1420 facultades amplias para nombrar o remover sus empleados y por consecuencia las tiene para manifestarles a estos, que, en casos como el presente, al aceptar la candidatura a diputados nacionales, no pueden continuar en la función o empleo que desempeñan en tales circunstancias, por las meras razones de alta moral política que inspiraron la ley electoral actualmente en vigencia -

Que de o no el Consejo adoptar ese temperamento, mi opinión es que debe hacerlo. - Prescindiendo expresamente de las personas desde que se trata de los funcionarios de relevantes condiciones morales, incapaces de hacer un uso indebido de sus funciones, y cuya separación del puesto implica una verdadera pérdida para la institución. -

Mas, por arriba de toda consideración
 de índole personal, afectiva o de concep-
 to, respecto al funcionario, y confor-
 me a mis convicciones y a la moral
 política que han inspirado en for-
 ma invariable la conducta de to-
 da mi vida, considero que es un
 deber del H. Consejo velar por la integri-
 dad de su moral administrativa,
 pues entiendo que nuestra demo-
 cracia no ha avanzado todavía
 lo suficiente en ese camino, no
 se ha comprometido ampliamen-
 te, aún, del principio funda-
 mental de la independencia
 absoluta del elector-emplorado,
 con respecto a su superior, des-
 de que todos los días puede
 comprobarse la triste realidad
 de que el subalterno oculta su
 opinión política ante el superior,
 y así, que es evidente, es la demos-
 tración acabada de que toda-
 vía son necesarios ciertas garan-
 tías para que sea efectiva, en
 toda su amplitud, la autono-
 mía del elector-emplorado.

Se arguirá que el voto secreto
 garantiza plenamente al elector
 el uso de sus derechos. Eso debería
 ser exacto, y lo será, pero aún
 no es así, por falta de educación
 cívica, puesto que muchos creen
 cumplir un deber de subordina-
 ción gerárquica al votar el can-
 didato del superior. — Si así

no fuera, si el elector tuviera el verdadero concepto y la independencia moral que solo da el buen planteo concienzudo del derecho que se ejerce del deber que se cumple, con la función del voto, estarían dadas todas las garantías con que se rodea el acto electoral y el secreto mismo del voto. Cuando esto suceda la democracia se habrá perfeccionado y entonces no habrá por que preocuparse de que el empleado o funcionario haga vida activa de comité o sea candidato, por el contrario, ello será aplaudido, desde que en verdad, al margen de la cosa pública solo deben ir aquellos que demuestran en la práctica de la vida que se preocupan del progreso del país y le dan su actividad ocupando su puesto de lucha en las filas de los partidos, no debiendo, en cambio, ir nunca a tal función los que con su alejamiento de las luchas políticas evidencian un egoísmo que los hace incapaces de ceder un instante de su tranquilidad en favor de lo que creen que pueda redundar en beneficio de la nación.

Reconociendo, pues, las imperfecciones de nuestra vida

política, creo que el H. Consejo, debe co-
 tar, dando ejemplo, todo aquello que
 por determinadas razones, den-
 tro de su orden administrativo, pue-
 da influir sobre una parte de los
 electores, muchos o pocos, en sentido
 favorable hacia uno u otro can-
 didato, resolviendo la cuestión
 planteada en forma negativa
 a las peticiones formuladas,
 y tanto más me creo obligado a
 sostener tal finalidad cuanto que,
 repeti. para constancia, he com-
 batido siempre como hombre de
 partido, invariablemente, la inter-
 misión de los funcionarios en los
 comités y en la propaganda
 política, sosteniendo, como Di-
 putado Nacional ante la H. Ca-
 mara, en julio de 1912, la vali-
 dad de las elecciones de depu-
 tados por Jujuy y La Rioja; pre-
 cisamente, entre otras razones
 por la existencia de dicho vicio,
 para mi fundamento. - Conse-
 cuente con ese criterio, en 1920, pro-
 clamado nuevamente candi-
 dato de mi partido a Diputa-
 do Nacional, renuncié de inme-
 diato la función pública que
 desempeñaba, como Interven-
 tor Nacional, en esos momentos.
 Por estos fundamentos, lamen-
 tando que con esta actitud el
 Consejo Nacional de Educación
 se vea privado de la labor de

tan buenos funcionarios, mi opi-
 nión es que, ante la aceptación
 de sus candidaturas a Diputa-
 dos Locales en la Capital por
 la Unión Cívica Radical, por
 los señores Doctor J. Enllot y Eni-
 lermo Fourouge, Secretarios Gene-
 ral y Abogado Jefe de la Oficina
 (Indicistal de este H. Consejo, respec-
 tivamente, y en vista de la situación
 de incompatibilidad que ello
 les crea con la función públi-
 ca que desempeñan, se les in-
 vita a presentar la renuncia
 de sus respectivos cargos. —

El señor Vice-presidente doctor
 Francisco M. H. Lozano se adhirió
 a lo manifestado por el
 señor Presidente y votó porque
 no se hiciera lugar a la li-
 cencia y se les invitase a pre-
 sentar la renuncia de sus
 puestos. —

Los Vocales señores Profesor D. Jar-
 ge H. Boero y Dr. Juan F. Pasquale
 también votaron porque no se hiciera
 lugar a la licencia solici-
 tada y se les invitase a pre-
 sentar la renuncia, en virtud
 de lo dispuesto en el artículo 3.^o
 del Decreto del T. E. fecha 2 de enero
 de 1923, que dice: "Artículo 3.º Los
 Jefes de Oficinas, los directores
 de colegios y escuelas y los em-
 pleados de correos y telégra-
 fos no pueden formar parte

de ningún comité político y teniendo presente que, como lo establece el artículo 1° del Reglamento de la Secretaría General, párrafo 89 del Digesto, "El Secretario General es el Jefe inmediato de todos los empleados del Consejo Nacional de Educación y la ley de presupuesto general vigente determina el carácter de Jefe de oficina del doctor Tourouge." al votar en el Seno E. Luiso M. G. y, Partida 110. "Abogado Jefe" para la Oficina Judicial. — El Vocal Dr. Fermín Errea votó porque se acordara la licencia solicitada fundando su voto en los siguientes términos:

Señor Presidente:

En el pedido de licencia formulado por los señores Doctor J. Guillot y Dr. Guillermo Tourouge. Secretario General y Abogado Jefe de la Oficina Judicial de este Consejo, respectivamente, he de dar mi voto favorable a dicha solicitud porque tengo opinión formada, de íntima y absoluta convicción, de que no existe incompatibilidad alguna, ni por los antecedentes legales, ni en el orden de la moral política, entre la condición de empleados públicos y el hecho de su candidatura para cualquier cargo electivo.

He de fundar brevemente mi voto.

Si nos atenemos al texto expreso de la ley de elecciones nacionales n.º 8874, que rige actualmente, no encontramos en ella, ni en su letra ni en su espíritu, disposición alguna que prohíba ni aún requiera coactiva o restrinja, el derecho que asiste a todo empleado público de cualquier categoría que fuere, de aceptar una candidatura a posiciones electivas, sin que ello implique en forma alguna la renuncia del cargo que desempeña. La ley explica y enumera los casos de excepción, en los cuales no está comprendido el que se debate...

El Presidente Sáenz Peña, dicta el 21 de marzo de 1912 el decreto reglamentario de la ley de elecciones que acababa de sancionar el Congreso. Los artículos 17 y 18 del mismo decían lo siguiente:

Artículo 17. Los Jefes de las Reparticiones de cualquier categoría que sean y los empleados de las mismas que trabajen en los comités de los partidos políticos, o hagan propaganda a favor de candidatos determinados, serán suspendidos en sus empleos y en la reincidencia serán exonerados...

Artículo 18. La misma pena sufrirán los empleados de cualquier categoría que dentro de sus respectivas oficinas hagan

propaganda o trabajar a favor de partidos políticos, o candidatos para puestos electivos. - Cada funcionario nacional proclama a los candidatos a posiciones electivas, para renuncia de su empleo inmediatamente de haberse hecho la proclamación. - En caso de renunciar a la candidatura, deberá hacerlo dentro del tercer día".

Cito estos artículos, no solamente porque en la última parte del '8, se contempla el caso que en este momento discutimos, sino que también y esto es lo fundamental, dicha disposición ha sido derogada expresamente por el decreto del actual Presidente de la Nación Dr. Marcelo T. de Alvear con fecha 2 de enero de 1923 que transcribo íntegramente:

Artículo 1.º Es deber de todos los empleados que el J. E. nombra y renueva cualquiera que sea su categoría, observar durante las contiendas políticas, la circunspección necesaria para garantizar la imparcialidad de los servicios públicos que atienden, y en caso de que se hagan notar por su conducta impropia, el J. E. los corregirá disciplinariamente o los exonerará, según la gravedad de las circunstancias. -

Artículo 2°.- Queda prohibido a todos los empleados del T. E. hacer propaganda dentro de sus respectivas oficinas en favor o en contra de partidos o candidatos determinados.

Artículo 3°.- Los Jefes de Oficina, los directores de colegios y escuelas y los empleados de correos y telégrafos, no pueden formar parte de ningún comité político.

Artículo 4°.- Los partidos o candidatos que se estimen perjudicados por infracciones de este decreto que se estimen perjudicados por infracciones de este decreto, pueden hacer la denuncia con los comprobantes pertinentes, al Ministerio de que dependa el empleado infractor.

Artículo 5°.- Quedan derogados los artículos 17 y 18 del Decreto del 27 de marzo de 1912, reglamentario de la ley de elecciones. ^{último}

La simple lectura de este Decreto, anticiendo que debe disipar toda duda aún en el espíritu más prevenido, sobre la razón que me asiste, para dar mi voto favorable al pedido de licencia, ya que ella surge con la mayor claridad, el propósito evidente de establecer de un modo definitivo que el empleado público no puede ser candidato a cargos electivos. No podía ser de otra manera, ya que una disposición

en contrario, importaría colocar a todos los empleados de la administración en condiciones de inferioridad a los demás ciudadanos argentinos, situación inadmisible en extremo ya que equivaldría a dejar de lado los mandatos imperativos de la carta fundamental de la nación, que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes de la República.

Se ha dicho en el curso de la discusión, que el artículo tercero del Decreto comprende el caso de los señores Guillot y Fourouge, porque son jefes de oficina, y además porque el solo hecho de ser candidato, implica formar parte de un comité político. No puedo aceptar bajo ningún concepto semejante interpretación. Ante todo, el caso en debate no es el del artículo tercero sino el del artículo quinto. No discutimos si los señores Guillot y Fourouge forman parte o no de algún comité político. Lo que se discute es si dichos señores pueden ser considerados empleados ante el hecho de su candidatura. Este es el caso planteado. Si a alguien sospechara que dichos señores forman o formaban parte de algún comité pudo haber traído el caso a discusión

en su oportunidad y lo hubiéramos resuelto.

Pero a pesar de todo y hecha la salvaguarda, deciré que meigo en absoluto que un candidato a cargo electivo, debe ser considerado siempre por ser solo hecho, como un miembro del comité del partido que lo proclama. Conozco y habrán conocido los señores miembros del Consejo, muchos casos en que los proclamados han sido simples partidarios o simpatizantes sin haber estado jamás afiliados a los comités políticos. No extreme menos pues las interpretaciones - porque aquí a mi juicio, y digo esto con todo respeto por la opinión contraria, no corresponde. Pero al comienzo de mi exposición, he dicho que no existía incompatibilidad ni por lo, antecedentes legales ni de orden moral. Y bien señor presidente; aparte de que las leyes entrañan lo moral, lo bueno y lo justo, porque se inspiran en dichos principios que son enmarcanentes a toda sociedad debidamente organizada, en el caso ocurrido, no percibo, no se me ocurre que sea inmoral que un empleado público no presente la renuncia de su cargo, una vez proclamado candidato. Los presidentes norteamericanos cuando son can-

y dados para su reelección se
 lanzan de inmediato a la lucha
 desarrollando una intensa pro-
 paganda, sin que a ningún ciu-
 dadano de la Unión se le ocurra
 decir que su Presidente, Jefe de
 la Administración pública
 válido de su cargo, o que haya
 sido rosado en lo más mínimo
 el principio de la ética política
 o de la moral administrativa. Se
 ha afirmado, también, que de a-
 cuerdo a la moral estricta es
 necesario que la administra-
 ción pública, sea insospecta-
 ble en lo que se refiere a la im-
 parcialidad y prescindencia
 política; que todavía la ma-
 sa no ha alcanzado un alto ni-
 vel de cultura, y aún con la con-
 quista del voto secreto es posi-
 ble la influencia decisiva
 de los que mandan. Estoy de
 acuerdo en que deben acordar-
 se la mayor suma de garantías
 aunque sin salverios de lo le-
 gal, pero desistiendo en lo que se
 refiere al voto secreto. - Este últi-
 mo es una conquista positi-
 va de nuestra legislación, a
 tal punto que ya constituyen
 los niños, los ciudadanos que
 desconocen su valor, dada
 la modalidad de nuestro
 pueblo y su inteligencia na-
 tiva. Con ellos se ativen es-

"noceda cualquier presión producir efectos contrarios a la misma. Bien sabe él, que en el cuarto oscuro encontrará siempre en libertad. -

Por el Decreto del Presidente Juan B. Justo, se prohibía a los empleados el que fueran candidatos, pero esa resolución fue sin duda alguna excesiva. - No se duda que fue noblemente inspirada por el hecho muy bien que el mal de nuestra democracia, radicaba sobre todo en los gobiernos erigidos en supremos electores. Fue pues dicha resolución, fruto de la época y del medio ambiente como lo fuera, el que la constitución establezca que los presidentes argentinos no puedan ser reelegidos para un período inmediato, porque tanto los hombres que la dictaron, como Alberdi su genial inspirador, estaban con el recuerdo fresco aún de una larga y dura tiranía. -

Pero no en vano han transcurrido doce años, y es así que el Presidente actual compensado de los progresos de la Nación en los últimos años, ya sea en el orden de la cultura general como en el de las prácticas políticas, designa sin efecto una disposición que privaba a una parte de los ciudadanos argentinos,

de los derechos que la Constitución y las leyes otorgan a todos por igual. En una palabra, el Decret. solo exige para los empleados que sean candidatos, lo que establece en su artículo primero, es decir, la circunspección necesaria para garantizar la imparcialidad de los servicios públicos. — Ahora bien: los señores Guellot y Fourouge han cumplido con esos requisitos, ya que los señores miembros del Consejo acababan de manifestar que se han conducido siempre en el desempeño de sus cargos con toda corrección.

Y por último señor Presidente se me ocurre esta reflexión: triste situación la de los empleados pobres, que no podrían aspirar a representaciones públicas ante la contingencia inmediata de la miseria para él y los suyos. — En cambio los empleados que gozan de una posición holgada, que no son pocos pero que son los menos, estarían en condición de hacerlo sin sobresos.

Por las razones que acabo de exponer, votaré porque se acuerde la licencia solicitada, pero no sin llamar la atención del H. Consejo sobre la trascendencia del asunto en debate, que considero el más grave que se haya plant-

"teados entre nosotros y desde que formo parte de este Cuerpo, ya que se están desinfruyendo derechos que acuerda la constitución, y consagrados por la ley y resoluciones del gobierno."

A mi juicio no corresponde sino que el Consejo, en uso de sus facultades propias, acuerde o no la licencia solicitada.

Como consecuencia de todo lo expuesto precedentemente se adopta la siguiente resolución:

No hacer lugar a la licencia solicitada por el Señor Secretario General don Víctor Juan Guillot y el Abogado Jefe de la Oficina Judicial Dr. Guillermo R. Fourouge, por considerar incompatible la función pública que desempeñan con la situación de candidatos a diputados nacionales para lo que han sido proclamados por la Unión Cívica Radical; e invitarlos a presentar las renunciaciones de sus puestos.

Entre líneas a fs 130 renglones 23 y 24 "último" Dale. Sobre raspado a fs 135 renglón 19 "reflexión". Dale.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez y cuarenta horas y cuarenta minutos.

[Firma]
[Firma]